

Medellín, cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	<b>EJECUTIVO GARANTÍA REAL</b>
Radicado	<b>05 001 31 03 007 2011 00164 01</b>
Demandante	<b>BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.</b>
Demandada	<b>ISABEL CRISTINA RAMÍREZ RAMÍREZ</b>
Juzgado origen	<b>TERCERO CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN MEDELLÍN</b>

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto proferido el 18 de julio de 2022, mediante el cual se rechazó de plano la nulidad formulada por Ismelda de los Dolores Ramírez Gallego.

## 1. ANTECEDENTES.

Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2022, Ismelda de los Dolores Ramírez Gallego solicitó la nulidad de la diligencia de secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria 007-9475 practicada el 25 de noviembre de 2011, con fundamento en la causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución.

Alegó tener la condición de poseedora y no contar con la posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos en los términos procesales, al no practicarse en realidad la diligencia de secuestro, no estar presentes ni el Inspector de Policía, ni quienes suscribieron el acta, siendo el acta un documento ficticio<sup>1</sup>.

El 18 de julio de 2022 el Juzgado rechazó de plano la nulidad al considerar que la memorialista carecía de legitimación para invocarla y que la irregularidad aducida es extemporánea de cara al término previsto en el artículo 40 del CGP<sup>2</sup>. Decisión que fue objeto de recurso de apelación.

En auto del 15 de septiembre de la misma anualidad, el Juzgado negó la concesión del recurso de apelación por no ostentar la recurrente la calidad de parte, proveído que fue recurrido y posteriormente revocado por el *a quo*, quien en providencia del 9 de febrero de 2023 concedió la alzada en el efecto devolutivo<sup>3</sup>.

## 2. EL RECURSO.

<sup>1</sup> Ver carpeta 01PrimeraInstancia / 02Ejecucion / C04NulidadDiligenciaSecuestro / archivo 01SolicitudNulidadSecuestroYDiligenciaSecuestro

<sup>2</sup> Ibíd. archivo 02AutoRechazaNulidad

<sup>3</sup> Ibíd. archivo 10Auto042VResuelveRecursoConcedeApelación

Para fundamentar la alzada indicó la recurrente que, si bien le asiste razón al Juzgado al analizar las oportunidades y causales taxativas de nulidad frente a la diligencia de secuestro, debe darse alcance a la solicitud como una nulidad constitucional, teniendo en cuenta que se trata de una tercera perjudicada que no tuvo la oportunidad material y legal de reclamar su reconocimiento en los términos de ley por una diligencia de secuestro inexistente que generó vulneración del derecho al debido proceso, pues nunca tuvo la oportunidad de comportarse como lo establecen los artículos 40 y 309 del CGP, razón por la cual considera que debe revocarse la decisión recurrida<sup>4</sup>.

Del recurso de apelación se corrió traslado, pronunciándose la parte demandante, quien se opuso al recurso señalando que la memorialista no es parte, ni tercero, tampoco acreditó su interés jurídico sustancial en el proceso, se mostró con una tesis sorpresiva y temeraria, bastándole solo un criterio subjetivo para afirmar la inexistencia de la diligencia de secuestro.

Puntualizó que, el hecho de no estar presente el día y hora de la diligencia de secuestro no significa que la diligencia fue inexistente y de lugar a retrotraer la actuación, ello implicaría enmendar la desidia de más de 10 años dejando de lado la extemporaneidad, por cuanto, los medios judiciales de oposición al secuestro ya precluyeron<sup>5</sup>.

### **3. CONSIDERACIONES.**

#### **3.1 COMPETENCIA.**

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado, concretamente, en el numeral 6 del artículo mencionado.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

#### **3.2 PROBLEMA JURÍDICO.**

Corresponde determinar si el rechazo de plano de la solicitud de nulidad por falta de legitimación y extemporaneidad en su

---

<sup>4</sup> Ibíd. archivo 04Recurso

<sup>5</sup> Ibíd. archivo 13MemorialDescorreApelacion

formulación, se encuentra ajustada a derecho o, si el despacho debió impartirle trámite.

### 3.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

#### Régimen de nulidades

El trámite normal del proceso se puede afectar por múltiples razones, algunas de ellas se consideran tan graves que han sido consagradas como causal de nulidad de manera taxativa en el artículo 133 del estatuto procedimental<sup>6</sup>, los demás defectos deben ser impugnados oportunamente so pena de que, por ausencia de reclamo, se entiendan remediados, según dispone el parágrafo de la norma en cita.

Por su parte, el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política dispone como causal de nulidad adicional *"la prueba obtenida con violación del debido proceso"*<sup>7</sup>.

Con relación a los requisitos para alegar la nulidad y la consecuencia jurídica de su ausencia, el artículo 135 prevé que debe rechazarse de plano cuando *"se funde en causal distinta de las determinadas"* en la norma, *"en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación"*.

#### Nulidad posterior a la adjudicación en remate

En lo concerniente al saneamiento de nulidades y aprobación del remate, establece en su parte pertinente el artículo 455 del CGP: *"Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación. Las*

---

<sup>7</sup> Con relación al alcance de la disposición normativa, en Sentencia SU159/2002 sostuvo la Corte Constitucional: *"El aparte citado establece el remedio constitucional para evitar que los derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso. Dada la potestad de configuración de la cual goza el legislador para desarrollar esa regla general, éste puede determinar las condiciones y requisitos bajo los cuales pueden ser válidamente obtenidas las distintas pruebas. El desarrollo legal, por ahora parcial, de esta regla se encuentra principalmente en los códigos de procedimiento penal y civil, en especial en las normas que regulan las nulidades procesales y la obtención de pruebas (...) El criterio fijado por la Corte es que la nulidad sólo afecta la prueba, salvo que no existan, dentro del proceso, otras pruebas válidas y determinantes con base en las cuales sea posible dictar sentencia, caso en el cual habría que concluir que la sentencia se fundó solamente, o principalmente, en la prueba que ha debido ser excluida"* (Negrilla fuera del texto).

***solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas" (Negrilla fuera del texto).***

Posteriormente, dispone la norma los puntos que debe resolver el juez al aprobar el remate y advierte en el inciso final que el incumplimiento de lo allí dispuesto se considera falta disciplinaria gravísima.

### 3.3 CASO EN CONCRETO.

Se encuentra acreditado que en el proceso ejecutivo de la referencia, el 25 de noviembre de 2011 se efectuó la diligencia de secuestro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 001-9475, a la cual concurrió la inspectora comisionada, la apoderada demandante, el secuestro y el señor Orlando Martínez Muñoz a quien se identificó como nuevo propietario del predio, conforme se desprende de la lectura del acta que milita en el expediente<sup>8</sup>.

También que, por auto del 7 de marzo de 2022, se aprobó el remate realizado el 10 de febrero del mismo año y que fuera adjudicado al señor Jaime de Jesús Correa Ángel<sup>9</sup>.

La memorialista desacuerda con la decisión recurrida, a su juicio, sí se encuentra legitimada para formular la nulidad con ocasión a su calidad de poseedora del bien y con relación a la extemporaneidad, adujo no contar con la posibilidad de formular oposición al secuestro y/o proponer nulidad por extralimitación de funciones de la comisionada, puesto que, la diligencia en realidad no se realizó y calificó el acta de ficticia. Circunstancias fácticas a las que atribuye la configuración de la nulidad prevista el artículo 29 de la Constitución.

El régimen de nulidades procesales se inspira por los principios de especificidad, convalidación y taxatividad, así, el Estatuto Procesal prevé las reglas que rigen en torno a la legitimación y oportunidad para formular la nulidad correspondiéndole al juez rechazarla de plano cuando entre otros asuntos, se funde en una causal distinta de las determinadas por la ley o se proponga por quien carezca de legitimación, de manera que, no puede ser formulada por cualquier persona o motivo, ni en la época que discrecionalmente se disponga.

La Corte Constitucional ha sostenido:

---

<sup>8</sup> Ver carpeta 01PrimeraInstancia / 01PRIMERAINSTANCIA / C002 / archivo 016ActaDeDiligenciaDeSecuestro

<sup>9</sup> Ibíd. archivo 095AprobacionDeRemate

*"es entonces al legislador a quien le compete (...) determinar las irregularidades que generan nulidad para garantizar la vigencia de las garantías del debido proceso. Es sólo por excepción que la Constitución Política toma directamente una decisión en la materia, cuando el inciso final del artículo 29 dispone que: "Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". En este sentido, esta Corte ha reconocido que "corresponde al legislador dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia y respeto"<sup>10</sup>.*

En esa línea, el legislador en el ámbito de libertad de configuración normativa dispone los defectos procesales que ameritan la aplicación de nulidad y los enlista taxativamente en el artículo 133 u otras disposiciones como el artículo 40 y 121 del CGP, así como el 29 de la Constitución Política que señala la nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso y, al tiempo, regula la oportunidad para alegar las irregularidades acaecidas en el proceso.

En el caso concreto, la memorialista pretende se declare nulidad de la diligencia de secuestro por ser un acto que, en su criterio, no existió y le impidió ejercer la oposición como poseedora del bien inmueble objeto del gravamen hipotecario. Supuesto fáctico que no se encuentra delimitado en los eventos dispuestos en el artículo 133 del CGP para habilitar el trámite de nulidad procesal.

Aunado a ello, no constituye configuración de nulidad en los términos del inciso final del artículo 29 de la Constitución, toda vez que, el mismo refiere a la obtención de una prueba obtenida con transgresión del derecho fundamental al debido proceso y, al secuestro no puede atribuírsele tal significación, pues es una medida cautelar que dista de ser una prueba, razón por la cual tampoco es dable subsumir el asunto a la regulación constitucional.

Adicionalmente, el artículo 40 del CGP dispone nulidad frente a la extralimitación de funciones del comisionado, empero, la tesis en que se sostiene la nulidad se dirige a una ausencia de diligencia de secuestro y a un acto procesal que, en criterio de la apelante fue ficticio e inexistente pero no a un exceso en las facultades otorgadas

---

<sup>10</sup> Sentencia C-537 de octubre 5 de 2016

a la inspectora en la comisión, luego, tampoco es viable acomodar el supuesto que se plantea a tal disposición normativa.

En ese orden, los hechos en que sustenta la nulidad propuesta no se encuentran previstos en la ley y la Constitución como vicios que tengan la virtualidad de afectar la actuación, motivo por el cual se estima acertado el rechazo de plano de la nulidad.

Y es que aun cuando el *a quo* fundó el rechazo de la nulidad en una ausencia de legitimación y oportunidad, cierto es que, lo medular, es la ausencia de configuración de una de las causales taxativas de nulidad, así, tal vía procesal no es el camino que corresponde a la memorialista para hacer reabrir el debate de medidas cautelares, máxime cuando el artículo 455 del CGP consagra la existencia de un plazo razonable al señalar que la adjudicación del predio y posterior aprobación del remate impide formulación de solicitudes de nulidad.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la hipótesis que plantea la memorialista dista de las causales de nulidad consagradas en la normatividad procesal y la Constitución como vicio capaz de afectar la actuación, se confirmará la decisión recurrida, sin condena en costas por no haberse causado.

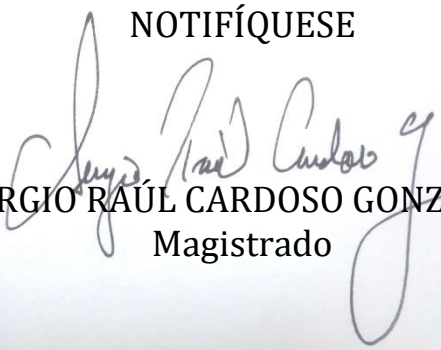
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

### **RESUELVE.**

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ  
Magistrado